elliot coen
CONSULTING

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL



INFORME ESPECIAL

Póliza INS Responsabilidad Civil para Presidente Chaves y su Gabinete

Análisis de Redes Sociales
Fecha de Análisis: 21 al 29 de octubre 2024

Costa Rica, 29 de octubre 2024



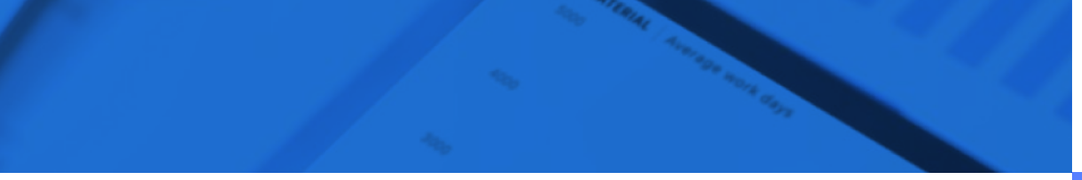
MÉTRICA GENERALES

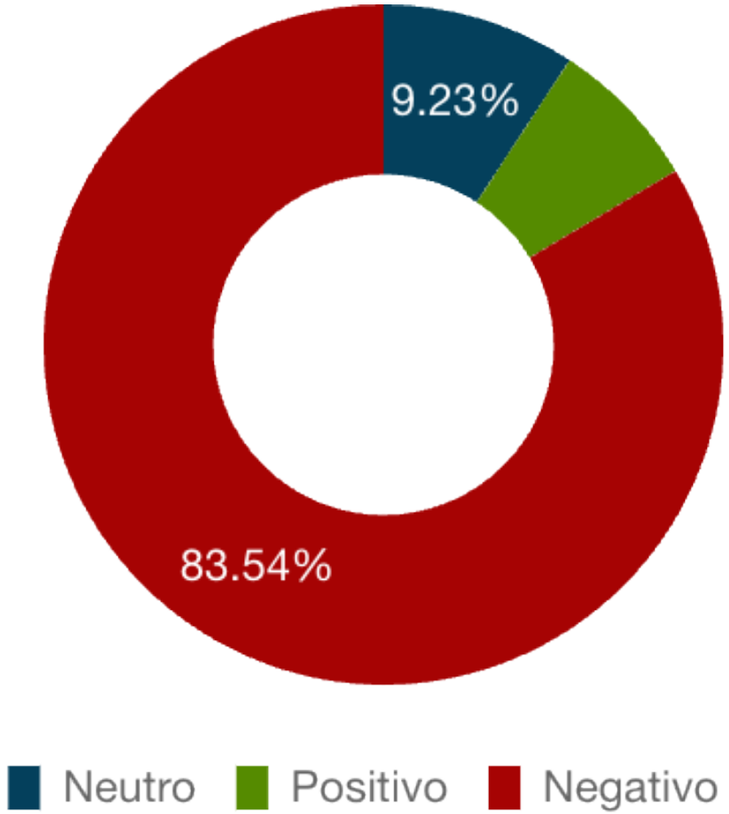
La reciente iniciativa de la Administración Chaves Robles de comprar al Instituto Nacional de Seguros (INS) una póliza de responsabilidad civil para el presidente de la República y su gabinete ha acaparado la conversación en las Redes Sociales.

En Antropología Social hemos realizado una medición con las herramientas de Escucha Social de Elliot Coen Consulting desde las 0 horas del 21 de octubre hasta las 24 horas del 28 de octubre del 2024 para medir el efecto de la iniciativa hasta el freno que anunció el ministro Acosta en espera del pronunciamiento de la Procuradoria General de la Republica.

elliot coen CONSULTING

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL







Las recientes publicaciones en diversos medios costarricenses han puesto de relieve la controversia en torno a la contratación de una póliza de responsabilidad civil para el presidente Rodrigo Chaves y su gabinete. Este tema ha suscitado un intenso debate político y social, con críticas provenientes de diferentes sectores, incluidos exmandatarios y diputados. La Contraloría General ha señalado que tanto Chaves como otros funcionarios deben asumir la responsabilidad económica relacionada con esta póliza, que se estima en aproximadamente 250 millones de colones. La oposición argumenta que esta medida representa un intento del gobierno por eludir la rendición de cuentas y proteger a sus miembros ante posibles acciones legales, lo que podría ser interpretado como un acto de impunidad.

Por otro lado, algunos defensores del gobierno sostienen que la póliza es necesaria para garantizar el ejercicio adecuado de las funciones gubernamentales sin temor a represalias legales. El Ministerio de Hacienda ha justificado la contratación, alegando que es fundamental para asegurar el funcionamiento del gobierno. Sin embargo, los críticos irresponsabilidad entre los funcionarios públicos. Este debate resalta tensiones inherentes en la política costarricense sobre la rendición de cuentas y la ética en el uso de recursos públicos, temas cruciales para los analistas políticos contemporáneos.

elliot coen
CONSULTING

INSTITUTO DE
ANTROPOLOGÍA
SOCIAL

DATOS GENERADOS (MEDIOS DIGITALES)



47
USUARIOS

921
PUBLICACIONES

10,100
INTERACCIONES

3,420
ME GUSTA

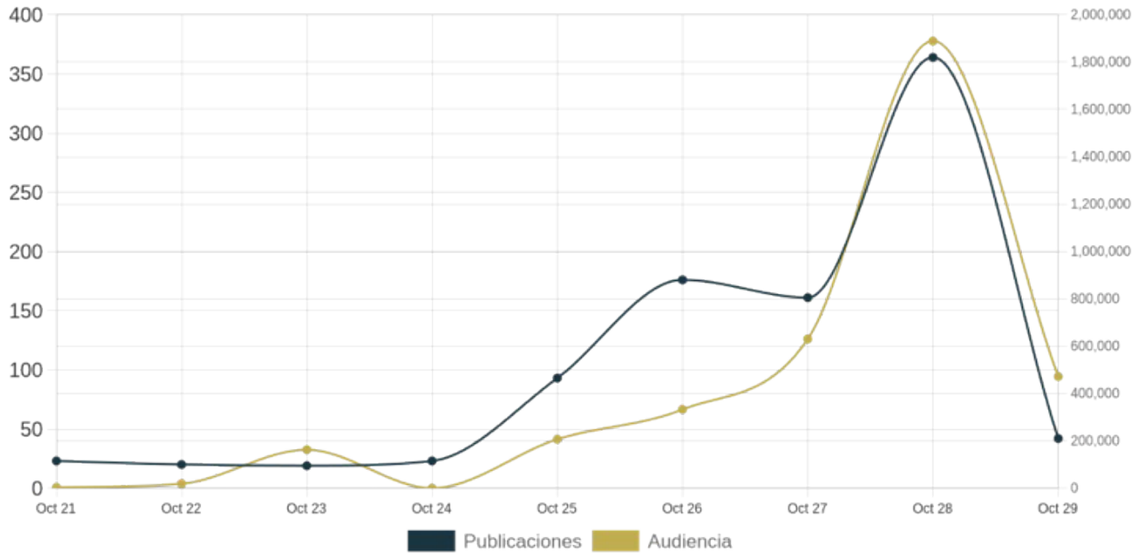
689
COMPARTIDAS

3,512
COMENTARIOS

elliot coen
CONSULTING

INSTITUTO DE
ANTROPOLOGÍA
SOCIAL

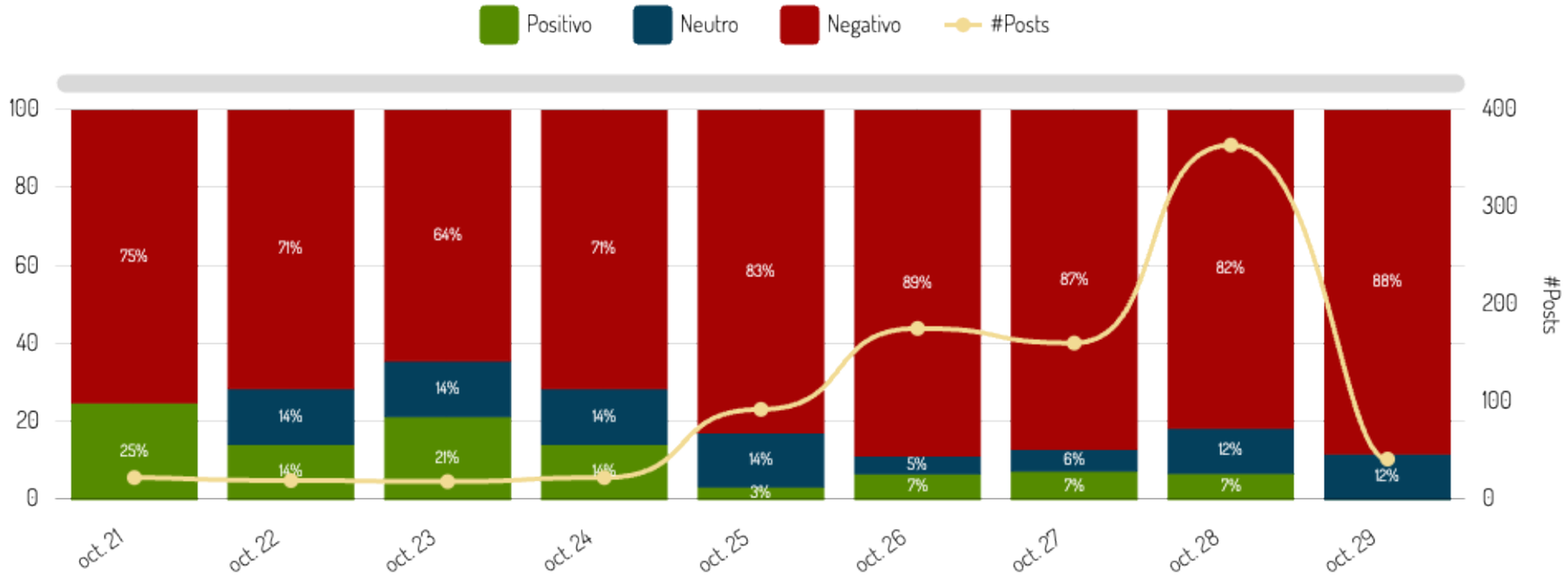
¿QUÉ PASO EN REDES SOCIALES CON LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PRESIDENTE Y SU GABINETE?



Las interacciones se dispararon el 28 de octubre llegando a alcanzar la discusión a 1,8 millones de costarricenses lo que evidentemente provocó un freno a la iniciativa que anunció el Ministro Acosta el 29 de octubre por la mañana.

elliot coen CONSULTING

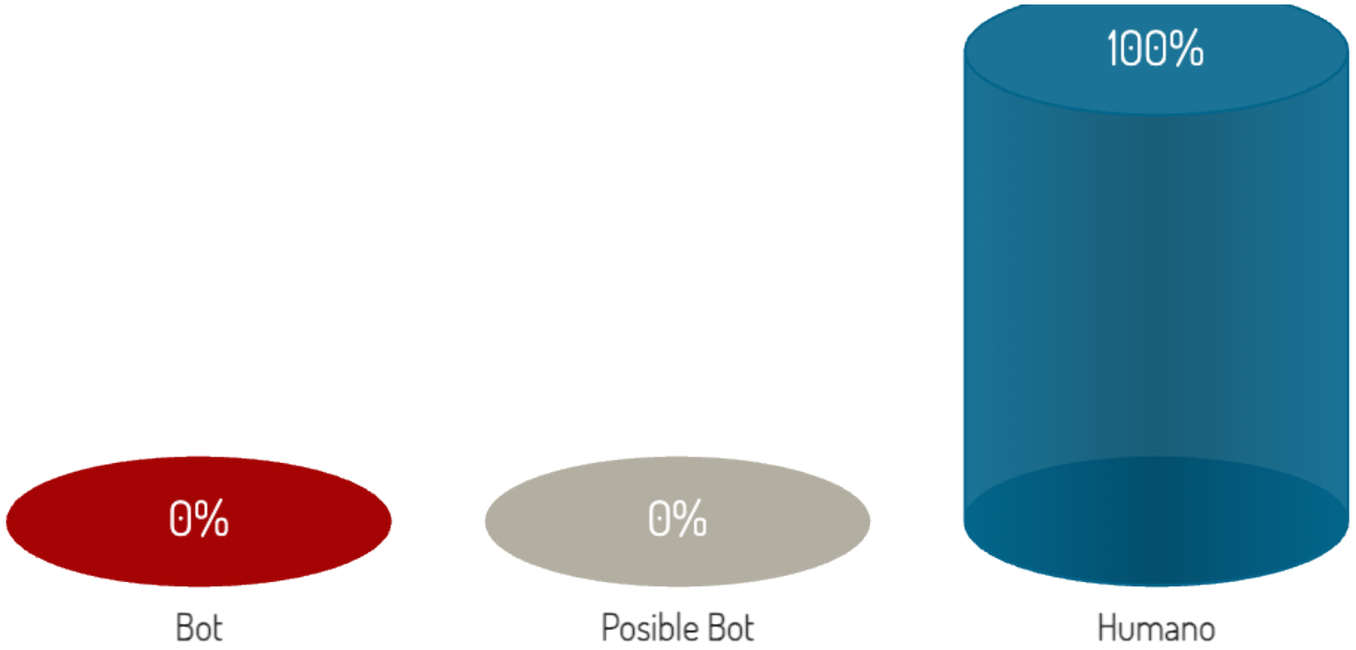
INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL



La discusión fue principalmente negativa alcanzando un 83% de desaprobación a la iniciativa en la comunidad digital

elliot coen CONSULTING

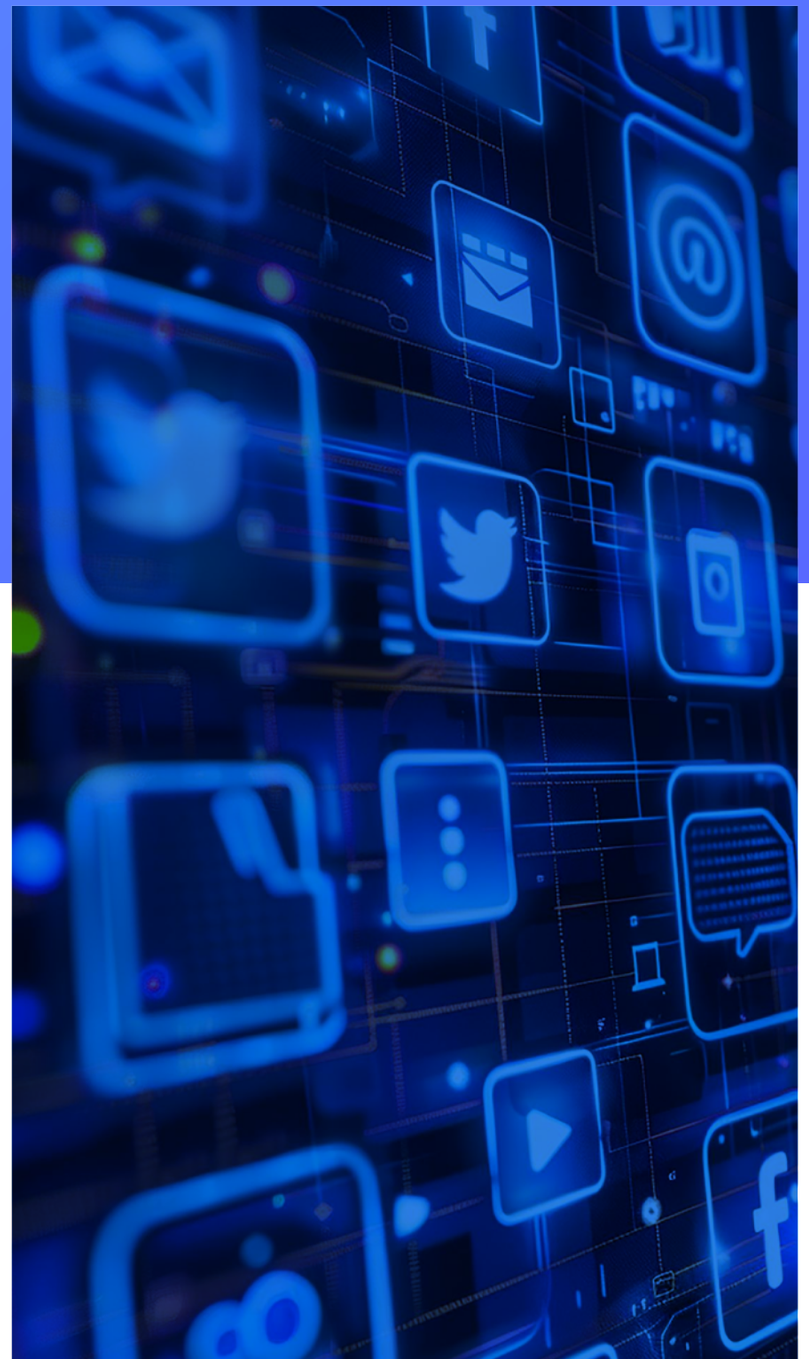
INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL



No se detectó incidencia de Bots alrededor del flujo de información generada por los medios lo que sorprende ya que alrededor de la administración Robles Chaves si se observan bots para apoyar sus iniciativas. Sobre este tema no fueron activados.

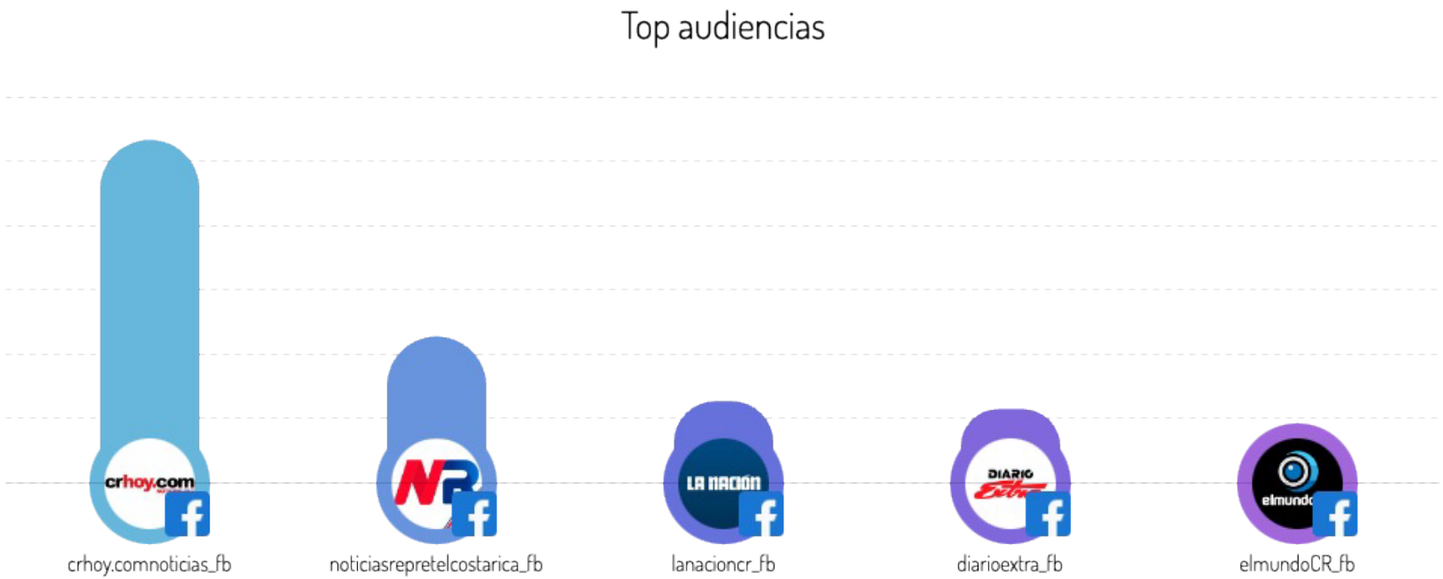
elliot coen CONSULTING

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL



TOP DE MEDIOS DIGITALES

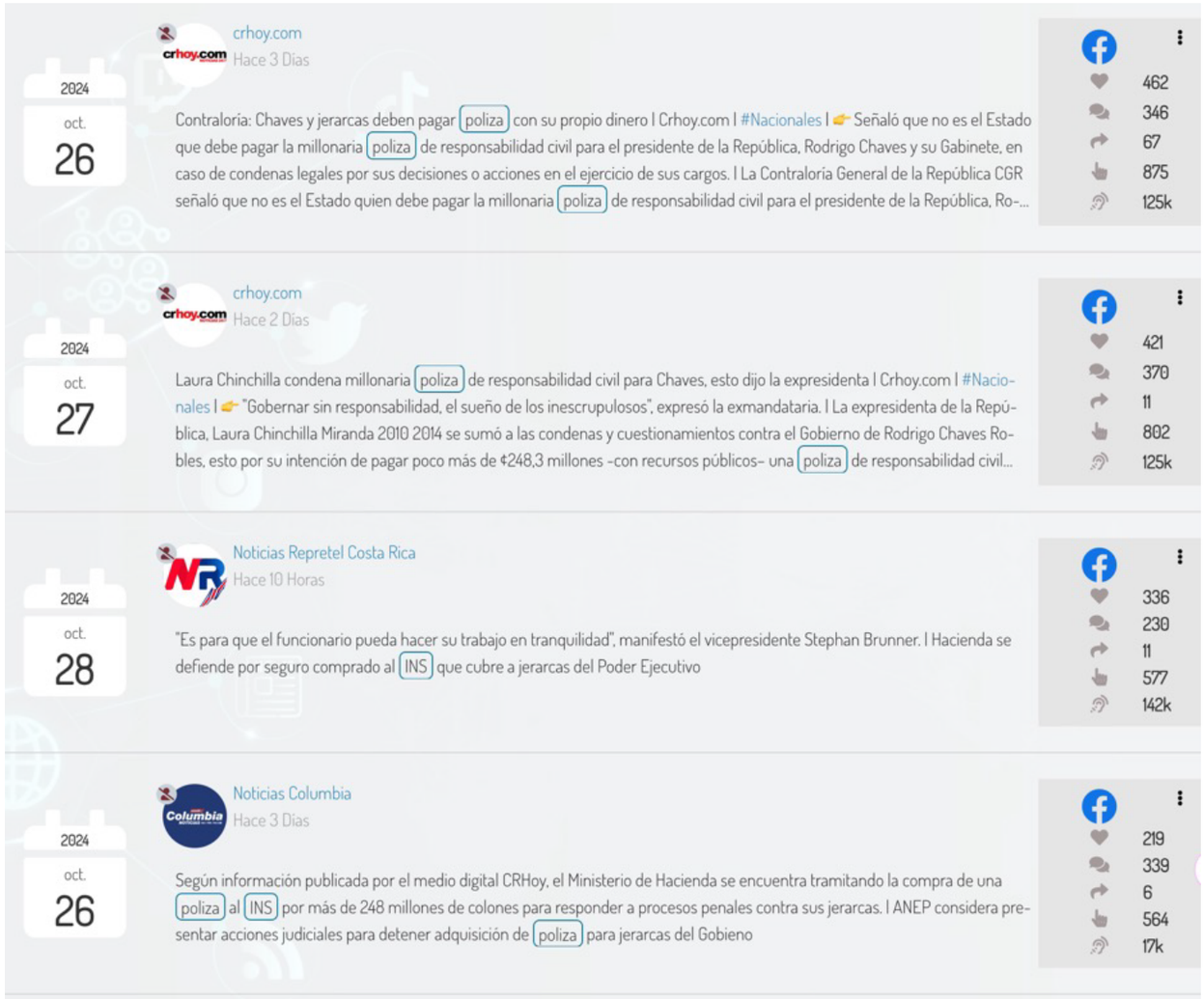
¿QUÉ MEDIOS DIGITALES GENERARON MAYOR INTERÉS?



elliot coen CONSULTING

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

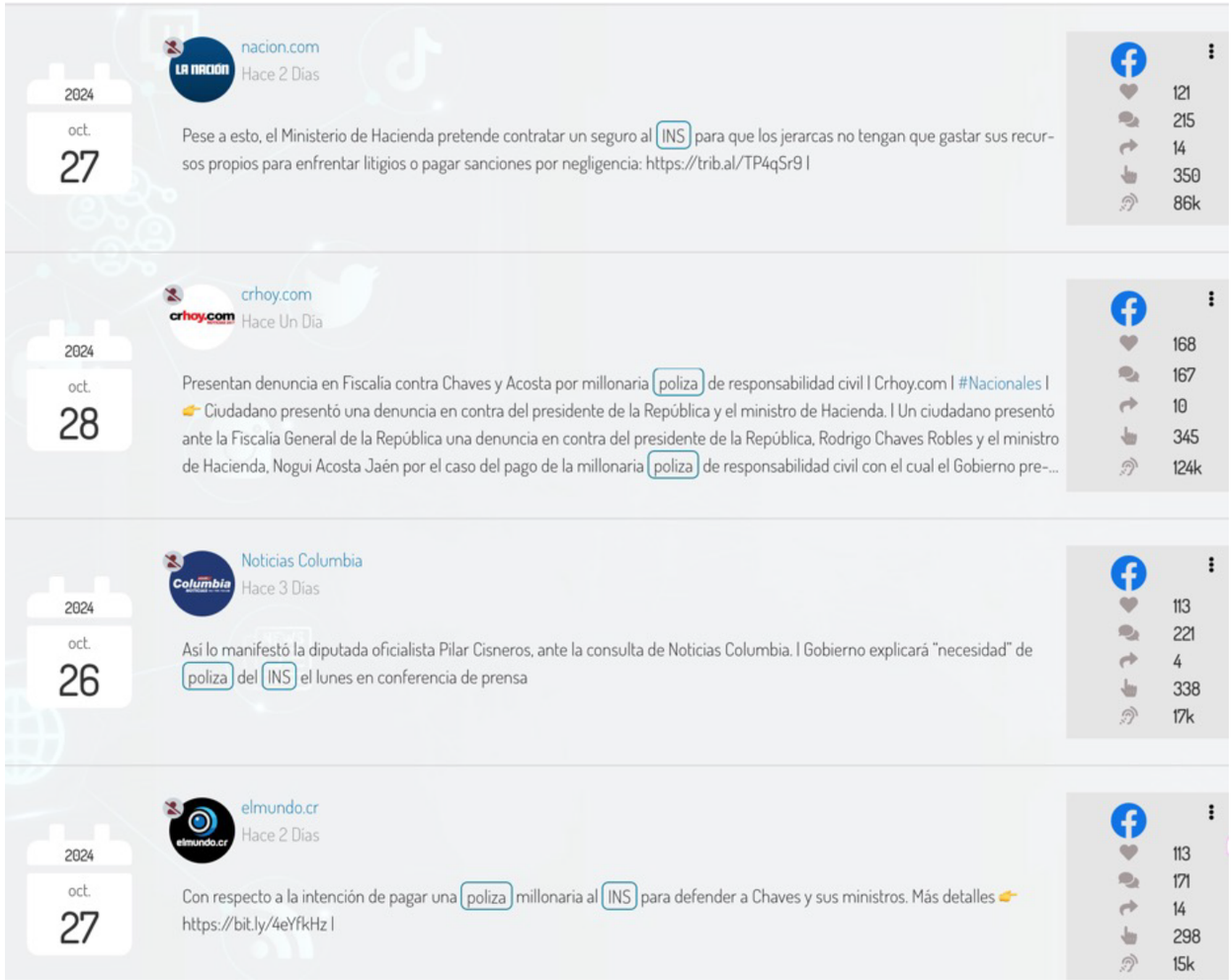
¿CUÁLES FUERON LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES?



elliot coen CONSULTING

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

¿CUÁLES FUERON LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES?



elliot coen CONSULTING

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

¿CUÁLES FUERON LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES?



elliot coen CONSULTING

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CONCLUSIONES



1) La contratación de pólizas de responsabilidad civil para funcionarios del gobierno es vista como un intento de promover la impunidad. Este análisis se basa en la percepción generalizada entre críticos y opositores que consideran que asegurar a los jerarcas contra demandas podría desincentivar la rendición de cuentas. La utilización de fondos públicos para proteger a quienes ocupan cargos altos plantea serias dudas sobre la ética del gobierno y su compromiso con la transparencia.

2) La oposición política, encabezada por figuras como Laura Chinchilla, ha manifestado un rechazo contundente hacia las pólizas propuestas. Este rechazo no solo se fundamenta en cuestiones morales, sino también en el temor a que tales medidas puedan normalizar prácticas corruptas. El análisis muestra que estas voces críticas están alineadas con una creciente demanda social por mayor responsabilidad y transparencia en el uso de recursos estatales, lo que podría influir en futuras decisiones políticas.

3) La solicitud al Instituto Nacional de Seguros (INS) para realizar un análisis de riesgo sobre la póliza refleja una preocupación legítima por las implicaciones legales y financieras de esta decisión gubernamental. Este paso puede interpretarse como un intento por parte del gobierno de legitimar su acción ante la opinión pública y los legisladores, aunque también puede ser visto como un reconocimiento implícito de los riesgos asociados con dicha póliza.

elliot coen CONSULTING

INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL



4) La conversación sobre posibles acciones ante la Fiscalía añaden una dimensión legal significativa al debate sobre las pólizas. Esto indica que el tema ha trascendido el ámbito político y se ha convertido en una cuestión judicial, lo que podría tener repercusiones importantes para el gobierno si se determina alguna irregularidad.

Este contexto resalta cómo las decisiones administrativas pueden desencadenar procesos legales que afectan tanto la imagen pública como la estabilidad política del gobierno.

5) El debate sobre las pólizas también pone de manifiesto tensiones más amplias entre el gobierno y la ciudadanía respecto a expectativas sobre gobernanza y rendición de cuentas. A medida que surgen críticas sobre el uso indebido de recursos públicos, se hace evidente que hay una creciente presión social para que los funcionarios actúen con mayor responsabilidad. Esta situación podría llevar a cambios significativos en las políticas gubernamentales si los ciudadanos continúan demandando transparencia y ética en la administración pública.